



EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Algunas consideraciones para evaluar el acogimiento al régimen de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas

Some Considerations to Assess Application for Early Recovery of General Sales Tax Regime

El plazo de caducidad y la mesa de partes electrónica

The Expiration Period and the Electronic Court Registry Office

Algunos apuntes en torno a las declaraciones y garantías en los procesos de M&A

Notes on Representations and Warranties in M&A Processes

Chile: la advertencia sobre los límites al poder

Chile: A Warning on the Limits on the Way to Power



El plazo de caducidad y la mesa de partes electrónica

5 IVO CHOQUE APAZA
Asociado, sede Juliaca



COMENTARIO TRIBUTARIO

Algunas consideraciones para evaluar el acogimiento al régimen de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas

8 LUCÍA RUIZ MITMA
Asociada, especialista en derecho tributario



Algunos apuntes en torno a las declaraciones y garantías en los procesos de M&A

10 VÍCTOR LAZO VÁSQUEZ
Socio, especialista en derecho corporativo



La digitalización del comercio exterior

13 HILLARY BARANDIARÁN VARGAS
Abogada, especialista en comercio exterior



ALERTA MAXIMA

Actualizan monto máximo de cobertura del fondo de seguro de depósitos

15



EL EXPERTO

Las descentralized autonomous organizations, sociedades imperfectas en la web 3

17 RAÚL VIZCARRA CASTILLO
Socio, especialista en derecho corporativo



DESDE EL CONGRESO

- * Facilidades tributarias para plantas petroquímicas de urea y fertilizantes
- * Impuesto a la fortuna

20



COMENTARIO LABORAL

Puntos pendientes de regulación; La prevención del cáncer en el ambiente de trabajo

22 ROCÍO SAUX VALDEZ
Socia, especialista en derecho laboral y seguridad social



Chile: la advertencia sobre los límites al poder

24 ALEXANDRA OJEDA
Especialista en comunicaciones



Actividades institucionales

27



COLUMNAS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 208

ESTUDIO MÚÑIZ
MÚÑIZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñoz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC
IDEAS & SOLUCIONES | editor.open@gmail.com
T- (51) 936 645 459

La pauperización de la política

"Hay quienes pierden la mente por completo para ser alma: locos. Hay quienes pierden el alma por completo para ser mente: intelectuales. Hay quienes pierden ambas para ser aceptados."

Charles Bukowsky

Según la muy útil "herramienta" digital desarrollada exprofesamente para las elecciones municipales y regionales de octubre 2022, por el medio periodístico Ojo Público (ojo-publico.com), un importante número de los 258 postulantes a la gobernación de las 25 regiones y de los más de 1500 candidatos a las alcaldías distritales y provinciales, registran denuncias policiales, investigaciones fiscales y en no pocos casos antecedentes penales. Una información similar publicita en su web la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay (Kuskachay.com).

Si al muy preocupante dato antes precisado, le agregamos uno igual o quizás peor, referido a la inviabilidad (por razones técnicas, legales o presupuestarias) de las propuestas de muchos de esos candidatos, quienes terminen siendo elegidos para tales cargos lo único que podrán garantizarle a sus electores - a contracorriente de lo que les ofrecen en sus muy entusiastas presentaciones públicas - es una gestión ineficiente o nula, cuando no perjudicial en grado sumo, para la vida diaria de estos.

Repárese en el hecho objetivamente cierto y fácilmente comprobable de que uno de los principales problemas de, por ejemplo, la ciudad de Lima, es su caótico y casi inexistente sistema de transporte público. Ninguno de los principales candidatos a esta alcaldía presentó un plan serio y viable que pueda empezar

siquiera a abordarlo (ya no solucionarlo). Ni que decir del tema de la seguridad ciudadana, que siendo uno también no menor, su solución no depende del alcalde, no obstante a todos los candidatos se les "ha ido la vida" ofreciendo solucionarlo.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley n.º 27972) los alcaldes tienen funciones muy acotadas y las ejercen en armonía con lo que establece expresamente el artículo IV de su Título Preliminar, concordante con los artículos 9 y 20 del mismo texto legal. No obstante, hay candidatos que han perdido de vista que sus propuestas de campaña deben estar pensadas más que para presidente de la república, para alcalde.

¿Qué ha pasado en nuestro país para que elección tras elección, cualquiera sea esta (presidente de la república, congresistas, alcaldes, etcétera) tengamos cada vez peores prospectos de candidatos? La respuesta la resume en el rótulo de este editorial, la política se ha empobrecido de forma alarmante y el *leitmotiv* de quienes la detentan o ejercen hoy es el beneficio propio antes que el colectivo o público.

Comentario final sobre este tema viene dado por el "costumbrismo" decadente de los "desayunos electorales", penoso e inútil; así como la absurda y anacrónica "ley seca", esa que si al menos no existiera nos haría concurrir a las ánforas de mejor humor.)))



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

The impoverishment of politics

"Some lose all mind and become soul: insane. Some lose all soul and become mind: intellectual. Some lose both and become accepted"

Charles Bukowsky

According to the useful digital “tool” specifically developed by the journalistic website Ojo Publico (ojo-publico.com) for the municipal and regional elections of October 2022, a significant number of the 258 government candidates for the 25 regions and over 1500 candidates for district and province mayor’s office, have police reports against them, tax investigations and - in many cases - criminal records. Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay (Kuskachay.com) (a civil anti-corruption association) publicizes information akin to that in its website.

If we add information just as bad or worse as the aforementioned - and very concerning - fact, with respect to the technical, legal or budgetary impracticality of the proposals made by many of said candidates, those who get elected for such positions would only guarantee their voters an inefficient or null management, if not fully detrimental, for their daily lives, in opposition to what they offer in their quite enthusiastic public presentations.

E.g., in the case of the city of Lima, note should be taken of the objectively true and easily verifiable fact that one of its main problems is its chaotic and almost nonexistent public transportation system. None of the main candidates for mayor has offered a serious and feasible plan to even begin addressing it (not solve it anymore). Not to mention public safety, which is also a major issue. But its solution does not depend on the

mayor; however, all candidates have been trying too hard to offer solutions.

As per the Organic Municipality Act (Act No. 27972), mayors have very specific duties and they execute them according to what is explicitly set out in article IV of its Preliminary Title, related to articles 9 and 20 of the same legal instrument. However, there are candidates who have forgotten their campaign proposals must be thought for the position of mayor and not for President of the Republic.

Why does our country have each time worse candidate prospects, one election after the other, and regardless of the authority to be elected (President of the Republic, congressmen, mayors, etc.)? The answer is summarized in the title of this editorial: politics have become shockingly poor and the leitmotiv of those currently exercising it is their own benefit over that of the collective or public.

A final comment on this topic is the decadent tradition of the pitiful and useless “election breakfasts”, as well as the absurd and outdated “prohibition law”, which nonexistence would, at least, let us go vote in a better mood. 》》



El plazo de caducidad y la mesa de partes electrónica

Para el inicio de una acción legal, la ley precisa plazos para su ejercicio. Estos plazos según la legislación nacional son de prescripción y caducidad, ambos con diferentes consecuencias jurídicas¹. El plazo de caducidad se fija por días, meses y años. El artículo 183° del Código Civil (en adelante, CC) establece las reglas para el cómputo del plazo en general. Así, si el plazo es señalado por días, éste se contabiliza por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles. Si el plazo es señalado por meses y años, el plazo se cumple en el año y mes de vencimiento, y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Asimismo, el numeral 5) del referido artículo señala que el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. A diferencia de esta regulación general, la caducidad se

produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil, así lo establece el artículo 2007° del CC.

El transcurso del plazo de caducidad es continuo, por ello no admite interrupción ni suspensión, excepto cuando sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Solo en este supuesto se suspende el plazo de caducidad, conforme al artículo 2005° del CC, concordante con el inciso 8) del artículo 1994° del referido código. De acuerdo a la amplitud de casos que encierra este supuesto de suspensión, se debe considerar en esencia para su configuración, la imposibilidad de presentar una demanda ante un juzgado. En ese sentido, no es posible presentar una demanda en caso de guerra, desastres naturales como terremotos, inundaciones o como la pandemia

¹ Conforme al artículo 2003° del Código Civil, la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente.

del COVID-19, paralización o huelga de trabajadores del Poder Judicial. En estos casos, evidentemente no será posible que la dependencia judicial competente reciba una demanda por falta de atención. Por tanto, allí se configurará el supuesto de la imposibilidad de recurrir ante un tribunal peruano, con lo que se suspenderá el plazo de caducidad.

Mediante Decreto Legislativo 1412, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 13 de setiembre de 2018, se aprueba la Ley de Gobierno Digital, cuyo objetivo es establecer el marco de gobernanza digital, lo que implica, entre otros, la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales. El Poder Judicial, en este proceso de digitalización, ha implementado diferentes herramientas, entre ellas la Mesa de Partes Electrónica (en adelante, MPE) como parte del servicio de justicia digital. Su implementación es ventajosa en muchos aspectos, una de ellas el horario para la presentación de escritos o demandas, la cual se puede realizar en cualquier día del año, incluidos sábado, domingo y feriados, desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas y se tiene recibido por la dependencia judicial, para los fines de cómputo de cualquier plazo, en el día de su presentación. Así lo establece la Resolución Administrativa N° 000177-2020-CE-PJ de fecha 30 de junio de 2020.

Así, la MPE se encuentra habilitada los 365 días del año, sin embargo, qué ocurre si el plazo fijado en meses y años vence un día inhábil. El artículo 124° de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que son días inhábiles aquellos en que se suspende el despacho judicial. Asimismo, el artículo 247° de la referida ley señala que no hay despacho judicial los días sábados, domingos y feriados no laborables, y los de duelo nacional y judicial. Asimismo, por inicio del año judicial y por el día del juez.

Cuando solo existía la mesa de partes física, la cual atendía en días hábiles, esto es de lunes a viernes, sí se configuraba la imposibilidad de recurrir a un tribunal peruano, pues los días sábado y domingo no era posible presentar una demanda, por tanto, se entiende suspendido el plazo de caducidad. Con la implementación de la MPE, tal imposibilidad no existe dada la habilitación permanente de ésta herramienta digital. Este supuesto solo podría alegarse cuando existan problemas en la MPE que impidan el ingreso de demandas y siempre que la mesa de partes física tampoco atienda. Casos así podemos ver en la Resolución Administrativa N° 000120-2020-P-CE-PJ, de fecha 16 de octubre de 2020 y la Resolución Administrativa N°

00030-2022-P-CE-PJ, de fecha 07 de abril de 2022, en los que la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tuvo que suspender los plazos procesales y administrativos debido a problemas en el sistema de MPE. Por ello, incluso ahora se puede afirmar que el uso de la MPE es la regla, si se quiere; y la mesa de partes física, la excepción dada la digitalización del proceso y la existencia del expediente judicial electrónico. 》》

**El transcurso del
plazo de caducidad es
continuo, por ello no
admite interrupción
ni suspensión, excepto
cuando sea imposible
reclamar el derecho
ante un tribunal
peruano.**



Ivo CHOQUE APAZA
Asociado, sede Juliaca
Member, Juliaca Branch
ichoque@munizlaw.com

The Expiration Period and the Electronic Court Registry Office

The law determines the deadlines to exercise the right to take legal action. As per local legislation, these deadlines are for prescription and expiration, both with different legal consequences¹. The expiration period is established in days, months and years. Article 183 of the Civil Code (hereinafter, CC) sets forth the rules for the general calculation of the deadlines. Thus, if established in days, the deadline is calculated in calendar days, unless the law or a legal act sets forth a calculation in working days. If the deadline is established in months and years, it ends on the year and month of expiration, and on the day of the month corresponding to the initial month. Also, section 5) of the aforementioned article states that the period ending in a non business day will expire on the first following working day. Unlike this general regulation, expiration occurs after the last day of the deadline, even if it is a non business day; this is stated in article 2007 of the CC.

The course of the expiration period is continuous. For this, no interruptions or suspensions are allowed, except when it is impossible to claim the right before a Peruvian Court. Only in this assumption will the expiration period be suspended, as per article 2005 of the CC, related to paragraph 8) of Article 1994 of said code. Based on the wide range of cases involved in this suspension assumption, the impossibility of filing a lawsuit before a court should be deemed essential for its configuration. In this regard, it is impossible to file a lawsuit in case of war, natural disasters such as earthquakes, floods or the COVID-19 pandemic, shutdown or strikes of Judiciary workers. Clearly, in these cases, the competent judicial unit will not be able to receive a lawsuit due to lack of service. Therefore, the assumption of the impossibility to pursue the case before a Peruvian court will be determined there, and this will suspend the expiration period.

The Digital Government Act was approved through Legislative Decree 1412, and was published in El Peruano Official Journal on September 13, 2018, aiming at setting a digital governance framework which implies process digitization and provision of digital services, among other things. In this digitization process, the Judiciary has implemented different tools. Among these

is the Electronic Court Registry Office (hereinafter, MPE, acronym in Spanish) as part of the digital justice service. Its implementation provides advantages in many aspects; one of them is the schedule for briefs and lawsuit submission, which can be done any day of the week including Saturdays, Sundays and holidays from 00:00 to 23:59. Documents are received by the judicial unit on the day of submission, for term calculation purposes. It is so established by Administrative Resolution No. 000177-2020-CE-PJ dated June 30, 2020.

Thus, the MPE is open 365 days a year. However, what happens if the deadline established in months and years expires on a non business day? Article 124 of the Organic Law of the Judiciary sets forth that non business days are those where judicial office services are suspended. Likewise, article 247 of the aforementioned law states there is no judicial office service on Saturdays, Sundays and non business holidays, as well as on national and judicial mourning days. This also applies for the beginning of the judicial year and on Judge's Day.

When only the in-person court registry office existed, it received documents on working days, from Monday to Friday, and it was impossible to pursue the case before a Peruvian Court since it was impossible to file a lawsuit on Saturdays and Sundays. Therefore, the expiration period was understood to be suspended. With the implementation of the MPE, said inconvenience disappears since this digital tool is permanently available. This assumption could only be alleged if the MPE problems that prevent filing lawsuits, and provided the in-person court registry office is closed either. Similar cases can be seen in Administrative Resolution No. 000120-2020-P-CE-PJ, dated October 16, 2020, and Administrative Resolution No. 00030-2022-P-CE-PJ, dated April 07, 2022. In these cases, the presidency of the Executive Committee of the Judiciary had to suspend procedural and administrative deadlines due to problems in the MPE system. For this, we can state - even now - that MPE usage is the rule, so to speak; and the in-person court registry office is the exception because of process digitization and the existence of electronic case files.)))

¹ As per article 2003 of the Civil Code, the expiration extinguishes the right and the corresponding legal action.

Algunas consideraciones para evaluar el acogimiento al régimen de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas

El régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV), aprobado por Decreto Legislativo n.º 973, tiene por objeto la promoción del desarrollo de proyectos de inversión de mediana maduración que involucren un compromiso de inversión no inferior a USD 5 000 000 y que requieran una etapa preproductiva igual o mayor a dos años¹.

El régimen consiste en la devolución del IGV que haya gravado las importaciones o las adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, efectuadas por el inversionista durante la etapa preproductiva del proyecto y que sean destinados directamente a la ejecución del compromiso de inversión. De no existir este régimen, aquel IGV habría sido recuperado, como crédito fiscal, una vez que el proyecto sea puesto en explotación.

No todos los bienes y servicios que se emplean en un proyecto de inversión pueden ser acogidos al régimen, sino solo aquellos expresamente descritos en los anexos 1 y 2 del Decreto Legislativo n.º 973, los que comprenden productos tales como materiales de construcción, herramientas para la industria, partes y accesorios de maquinaria, maquinaria industrial, equipo de transporte, entre otros, y servicios como contratos de construcción, demolición, preparación de terreno, instalaciones eléctricas, terminación y acabado de edificios, servicios de transporte, servicio de almacenamiento, manipulación de carga, servicios de contabilidad, actividades jurídicas, actividades de consultoría, publicidad, estudios de mercado y análogos, entre otros.

Asimismo, es importante mencionar que, aun cuando los bienes y servicios empleados en un proyecto de inversión se encuentren comprendidos en los citados anexos, solo se ha incluido en el régimen a aquellas adquisiciones en las que se pague un IGV que exceda de 9 unidades impositivas tributarias (actualmente, S/ 41 400). En el caso de servicios, tal límite se determina en función de la retribución total pactada por el servicio, respaldada en el respectivo contrato de prestación de servicios.

Así, para evaluar si el régimen bajo comentario será de provecho para un proyecto de inversión, deberá identificarse preliminarmente los bienes y servicios que se requerirá durante su ejecución, y evaluar si están o no comprendidos en los anexos 1 y 2 del Decreto Legislativo n.º 973.

Para el acogimiento a este régimen, es necesario seguir un trámite previo ante ProInversión, que involucra una evaluación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del ministerio del sector en el que se ejecutará el proyecto de inversión. La tramitación del procedimiento puede, en la práctica, extenderse más allá de los plazos legales, siendo prudente considerar un tiempo estimado de 5 a 6 meses desde el inicio del procedimiento hasta la publicación de la resolución ministerial que califica al solicitante como beneficiario del régimen.

Una vez obtenida la calificación como beneficiario del régimen, el solicitante queda habilitado para requerir a la Administración Tributaria la devolución del IGV comprendido en el régimen. »



LUCIA RUIZ MITMA

Asociada, especialista en derecho tributario

Member, Tax Law expert

lruizm@munizlaw.com

¹ Nótese que para los proyectos del sector agrario no será necesario alcanzar tal monto mínimo de inversión.

Some Considerations to Assess Application for Early Recovery of General Sales Tax Regime

The special early recovery of general sales tax regime (IGV, acronym in Spanish), approved by Legislative Decree No. 973, aims at promoting the development of medium-term maturity investment projects involving an investment commitment of not less than USD 5,000.000 or demanding a pre-production stage equal to or higher than two years¹.

The regime consists in the refund of the IGV encumbering imports or local acquisitions of new capital goods, new intermediate goods, services and construction contracts, made by investors during the pre-production stage of the project and which are directly intended for the execution of the investment commitment. In case no such regime exists, the IGV would be recovered, as tax credit, once the project is in operation.

Application to the regime can be made only for some of the goods and services used in an investment project, which are expressly described in annex 1 and 2 of Legislative Decree No. 973. It includes products such as construction materials, industry tools, machinery parts and fittings, industrial machinery, transportation equipment, among others; and services such as construction contracts, demolition, site preparation, electrical installations, building finishes and completion, transportation services, warehouse services, load-handling, accounting services, legal activities, consultancy activities, advertisement, market and analogue research, among others.

Also, it should be noted that, even though the annexes mentioned above encompass the goods and services used in an investment project, the regime only includes purchases involving an IGV payment exceeding 9 Peruvian taxation units (currently, PEN 41,400). In the case of services, said limit is determined on the basis of the total revenue negotiated for the service, supported in the corresponding service agreement.

Thus, the goods and services to be required during the execution shall be preliminarily identified, and evaluate if these are contained or not in annexes 1 and 2 of Legislative Decree No. 973 in order to assess if the regime subject of this article will be advantageous for an investment project.

To apply for this regime, a prior procedure before ProInversión is required. It involves assessment by the Ministry of Economy and Finance, and the ministry of the sector where the investment project will be implemented. In practice, the procedure may extend beyond legal timeframes. It is well-advised to consider an estimated 5 to 6-month period since the proceeding begins until the ministerial resolution qualifying the applicant as beneficiary of the regime is published.

Once the regime beneficiary qualification is granted, the applicant shall be authorized to request the Tax Administration for the IGV refund included in the regime. »

¹ It should be noted that the agricultural sector projects will not need to achieve such minimum investment amount.



Algunos apuntes en torno a las declaraciones y garantías en los procesos de M&A

Uno de los aspectos medulares al momento de negociar un contrato de M&A es la sección de declaraciones y garantías que el vendedor otorga frente al comprador. En efecto, en transacciones de M&A, es usual que el vendedor otorgue frente al comprador diversas declaraciones y garantías. Algunas de ellas vinculadas al vendedor mismo (por ejemplo, respecto de su capacidad para celebrar el contrato o la titularidad de las acciones) y otras vinculadas a la empresa target a ser transferida, en la cual se abarcan diversos aspectos, tales como los societarios, laborales, tributarios, contables, ambientales, entre muchos otros, los que pueden ir variando dependiendo de la industria, antigüedad de la empresa, etc.

Es relevante considerar que la emisión de declaraciones y garantías es un elemento tan usual y propio de toda transacción que el vendedor

las emite aun cuando el comprador ha hecho su propio due diligence y pueda conocer muchos de los aspectos que son objeto de declaración. Uno podría llegar a pensar que con el conocimiento adquirido por el comprador no sería necesario que el vendedor efectúe declaración alguna, puesto que la información sobre la que puede declarar ya la ha revisado el propio comprador.

Esto, sin embargo, no es del todo cierto. Un proceso de due diligence, por más exhaustivo que sea, jamás podrá reemplazar el conocimiento íntimo y detallado que tenga un vendedor (o la gerencia o el directorio), ni tampoco podrá cubrir al comprador respecto de elementos que no hayan podido ser revisados, ya sea porque el comprador específicamente no preguntó por ellos o porque el vendedor (de buena o mala fe) no entregó alguna información que luego resultó siendo relevante.

En ese sentido, la función de las declaraciones y garantías es siempre dual y no se ve mermada por la existencia o no de un *due diligence*, por más exhaustivo que haya sido. Así, tenemos que, por un lado, lo que se busca es reducir al máximo la asimetría informativa existente entre el comprador y vendedor respecto de la empresa target y sus negocios. Del otro lado, el objetivo es asignar riesgos entre las partes en caso se verifique alguna contingencia relacionada con el objeto de las declaraciones y garantías del caso en concreto.

Este último punto es particularmente importante, ya que la redacción específica de cada declaración y garantía asignará un nivel de riesgo distinto entre comprador y vendedor. Si la declaración es muy genérica y amplia, el vendedor asume un mayor nivel de riesgo respecto de lo que está declarando. Por el contrario, si la declaración es específica y restringida, será el comprador el que asumirá un mayor nivel de riesgo. Del lado vendedor, incorporar condicionantes como “a conocimiento del vendedor”, “salvo por lo establecido en”, “de manera razonable” o “que no exceda de un monto de X”, entre otros similares, hará que encontrar un incumplimiento de la declaración en específico por parte del vendedor sea más difícil. Obviamente, del lado comprador, evitar lo más que se pueda este tipo de condicionantes en las declaraciones es por lo que uno debe de empujar.

Otro punto para tomar en cuenta, tanto para vendedor como para comprador, es que cada parte debe de mirar con especial atención aquellas declaraciones en la que pueda tener alguna preocupación para negociarlas al máximo. Evitar discusiones no estratégicas en la cláusula de declaraciones y garantías, que suele ser de las más extensas, es clave para una negociación eficiente y exitosa.

Finalmente, es importante tomar en cuenta una creciente tendencia transaccional: los seguros de declaraciones y garantías (“RWI”). Estos seguros vienen incrementando su popularidad como herramientas de asignación de riesgos y, sobre todo en Estados Unidos, se han convertido en una alternativa a los mecanismos tradicionales de protección en este tipo de operaciones.

Según el reporte Global M&A and Transaction Solutions Risk in Review 2020 emitido por AON, el número operaciones de M&A con seguros de esta naturaleza ascendió a 3 980 en 2020, con un aumento del 18 % respecto de 2019.

Adicionalmente, según un reporte de JDSupra, el 2021 representó un nuevo hito para este tipo de seguros, siendo que al menos un proveedor de seguros declaró que la cantidad de pólizas de RWI que colocó en 2021 representó un aumento del 71% con respecto a 2020.

Si bien el uso de este tipo de seguros se encuentra aún muy limitado en el Perú, no se puede negar la tendencia mundial ni tampoco se debería de obviar la importante herramienta que estos seguros pueden ser para el comprador, sobre todo en empresas donde el daño causado por el incumplimiento de una declaración pueda implicar un monto importante. »

Es relevante considerar que la emisión de declaraciones y garantías es un elemento tan usual y propio de toda transacción que el vendedor las emite aun cuando el comprador ha hecho su propio due diligence y pueda conocer muchos de los aspectos que son objeto de declaración.



VICTOR LAZO VÁSQUEZ

Socio, especialista en derecho corporativo

Partner, Labor Law expert

vlazo@munizlaw.com

Notes on Representations and Warranties in M&A Processes

One of the key aspects when negotiating an M&A contract is the representations and warranties section the seller grants the acquirer. Indeed, in M&A transactions, the seller usually grants the acquirer several representations and warranties. Some of them are related to the seller himself (e.g., regarding his capacity to enter the contract or title to shares) and others related to the target company to be transferred, which encompasses several aspects, such as corporate, labor, tax, accounting, environmental, among many others. They may vary depending on the industry, age of the company, etc.

It is relevant to take into consideration that issuing representations and warranties is something so usual and typical to all transactions that the seller issues them even though the acquirer has done his own due diligence and may know many of the aspects subject of representation. One may think that it would not be necessary for the seller to issue any representation whatsoever, because of the knowledge the acquirer may have obtained, and since the information to be represented has already been reviewed by the acquirer himself.

However, this is not entirely true. A due diligence process, as thorough as it may be, could never replace the intimate and detailed knowledge of a seller (or the management or the Board of Directors), neither could it provide coverage to the acquirer regarding the items that could not be reviewed, either because the acquirer did not specifically ask for them or because the seller (in good or bad faith) did not deliver any information that turned out to be relevant afterwards.

In this regard, the role of representations and warranties is always dual and the existence or not of a due diligence, as thorough as it may be, never lessens it. Thus, on one side, the purpose is to reduce to the utmost the existing information asymmetry between the acquirer and the seller regarding the target company and its businesses. On the other hand, the purpose is to assign risks among the parties in case any contingency linked to the object of the representations and warranties to the specific case is verified.

This is particularly important, since the specific wording of each representation and warranty will assign a different risk level between the acquirer and the seller. If the representation

is too generic and wide, the seller undertakes a higher risk level with regard to the items reported. On the contrary, if the representation is specific and restricted, it will be the acquirer who will undertake a higher risk level. From the seller's side, adding constraints such as "to the seller's knowledge", "except for the provisions in", "reasonably" or "that does not exceed the amount of X", among others, will make it more difficult to find a breach attributed to the seller in the specific representation. Obviously, from the acquirer's side, one must push to avoid the use, as far as possible, of this kind of constraints in the representations.

Another point to take into consideration, both for the seller and the acquirer, is that each party should pay special attention to those representations about which they may have some concerns so that they can negotiate them to the utmost. Avoiding non-strategic discussions in the representations and warranties clause, which is usually one of the longest, is key for an efficient and successful negotiation.

Finally, it is important to take into account an increasing transactional trend: representations and warranties insurance ("RWI"). This insurance is becoming more popular as a risk assignment tool and, especially in the United States, has become an alternative to the traditional protection mechanisms for this kind of operations.

According to the Global M&A and Transaction Solutions Risk in Review 2020, issued by AON, the number of M&A operations with this type of insurance amounted to 3,980 in 2020, with an increase of 18% compared with 2019. In addition, as per a JDSupra report, 2021 was a new milestone for this type of insurance. At least one insurance provider stated that the amount of RWI policies placed in 2021 represented an increase of 71% compared with 2020.

Although the use of this type of insurance is still very restricted in Peru, neither can the global trend be denied nor should it be ignored that this insurance can be an important tool for acquirers, especially in companies where the damage caused by breach of a representation may involve an important amount.)))

LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

La necesidad de hacer más eficiente el flujo de los procesos vinculados al comercio exterior, tanto de importación como exportación, sobre todo a partir de la aparición de la pandemia del COVID-19, hizo que el Perú esté dando importantes avances en digitalización con la modernización y automatización de diversos procesos, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena logística del comercio internacional.

En ese sentido, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Estado peruano ha priorizado la necesidad de digitalizar los procesos necesarios para la importación y exportación, tales como el envío de documentos mediante tecnologías digitales que permitan la facilidad de intercambiar documentación e información; así como promover la digitalización de los procesos a cargo de las entidades públicas y privadas.

Al respecto, tenemos el caso del trámite para certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA), en donde anteriormente se presentaba la documentación de manera física y ahora todo el proceso se realiza mediante la clave SOL en el portal de Sunat, lo que permite la presentación electrónica de toda la documentación que sustenta cada requisito para certificarse como OEA dispuestos en el Procedimiento General "Certificación como Operador Económico Autorizado" DESPA-PG.29 (Versión 3).

Asimismo, cabe señalar que se implementaron trámites y procesos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de la Sunat, lo cual facilita la inserción y participación de las empresas peruanas en la cadena de suministro del comercio internacional.

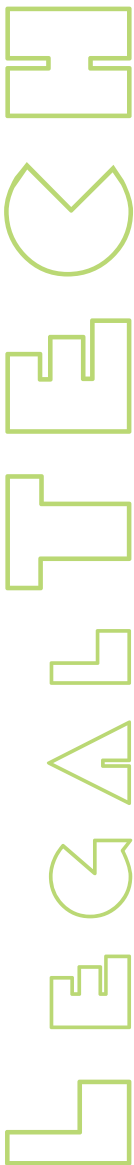
De otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el marco del Decreto Legislativo n.º 1492, publicado con fecha 10 de mayo del 2020, puso a disposición de los operadores de comercio exterior el Módulo de Intercambio de Información entre Operadores (MIIO).

Sobre ello, cabe precisar que con el Decreto Legislativo n.º 1492 se contribuyó en gran medida con la digitalización a través de medios electrónicos, considerando que la norma contenía la digitalización de todos los procesos de comercio exterior, así como la tipificación de las infracciones vinculadas a la obligación de digitalización de los operadores de comercio exterior.

Finalmente, podemos afirmar que nos encontramos encaminados a lograr la eficiencia y eficacia de nuestros procesos con la ayuda de los avances tecnológicos que aportaran grandes oportunidades a todos los intervinientes de la cadena logística del comercio internacional y a las operaciones logísticas vinculadas al ingreso y salida de mercancías desde o hacia el Perú. »



HILLARY BARANDIARÁN VARGAS
Abogada, especialista en comercio exterior
Attorney, Foreign Trade expert
hbarandiaran@munizlaw.com



DIGITIZATION OF FOREIGN TRADE

The need to make the foreign trade flow of processes more efficient, both for imports and exports, especially since the COVID-19 pandemic appeared, led Peru to a significant progress in digitization. Various processes went through modernization and automation to improve efficiency and effectiveness of the international trade logistics chain.

In this regard, within the framework of the COVID-19 health emergency, the Peruvian government has prioritized the need for digitization of import and export processes, such as document delivery by means of digital technologies that allow an easy exchange of documentation and information. Also, promoting digitization of the processes under public and private entities.

For example, in the case of the procedure to be certified as an Authorized Economic Operator (OEA, acronym in Spanish). Previously, all documentation was submitted in physical form and now the whole process is done with the SOL key at Sunat website; this allows the electronic submission of all documentation to meet each requirement for OEA certification as set forth in the General Procedure "Authorized Economic Operator Certification", DESPA-PG.29 (Version 3).

Also, it should be noted that procedures and processes in Sunat Foreign Trade Single Window (VUCE, acronym in Spanish) were implemented; this facilitates insertion and participation of Peruvian companies in the international trade supply chain.

On the other hand, the Ministry of Foreign Trade and Tourism (Mincetur), within the framework of Legislative Decree No.1492, dated May 10, 2020, made available the Information Exchange Module between Operators (MIIO, acronym in Spanish) to foreign trade operators.

In this regard, it should be noted that Legislative Decree No.1492 greatly contributed to digitization through electronic media, taking into consideration that the regulation contained the digitization of all foreign trade processes, as well as the classification of offenses related to foreign trade operators' digitization obligation.

Finally, we can assert we are on the way to achieving efficiency and effectiveness in our processes with the aid of technological progress which will bring great opportunities to all those involved in the international trade logistics chain and logistics operations related to the entry and exit of goods to or from Peru.))





ACTUALIZAN MONTO MÁXIMO DE COBERTURA DEL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS

Lima, martes 6 de setiembre de 2022

Alerta Legal Financiera

SISTEMA FINANCIERO

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que mediante Circular n.º B-2261-2022; F-600-2022; CM-449-2022; CR-316-2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) correspondiente al trimestre setiembre - noviembre 2022.

¿A quiénes afecta?

A las empresas del sistema financiero autorizadas a captar depósitos del público reguladas en el literal A del artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley n.º 26702; y sus depositantes.

¿Cuándo entra en vigencia?

La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

Actualizar el monto máximo de cobertura del FSD correspondiente al periodo setiembre - noviembre 2022.

¿De qué manera los afecta?

Las disposiciones normativas más relevantes son las siguientes:

1. Monto máximo de cobertura del FSD: S/124 428.
2. Periodo de cobertura: Setiembre - noviembre de 2022.

Pueden acceder al texto completo de la normativa indicada en el siguiente enlace web:

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizacion-del-monto-maximo-de-cobertura-del-fondo-de-seg-circular-no-b-2261-2022-2101696-1/>

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 3 de setiembre de 2022.

En caso requiera más información, por favor, no dude en contactarse con nuestros abogados especialistas en esta materia al siguiente correo electrónico: AreaFinanciera@munizlaw.com 



UPDATE OF COVERAGE MAXIMUM AMOUNT OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND

Lima, Tuesday, September 6, 2022

Legal and Financial Alert

FINANCIAL SYSTEM

We bring to our clients' attention that the Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS, acronym in Spanish), through Circular No. B-2261-2022; F-600-2022; CM-449-2022; CR-316-2022, has updated the coverage maximum amount of the Deposit Insurance Fund (DIF) for the quarter September - November 2022.

Who is affected?

Companies from the financial system authorized to receive deposits from the public, and regulated as per paragraph A of Article 16 of the General Law of the Financial and Insurance Systems and Organic Law of the SBS, Act No. 26702 and depositors.

When does it become effective?

This Circular is effective as of the day after its publication.

What is the purpose of this regulation?

Updating the coverage maximum amount of the DIF for the period of September - November 2022.

How does it affect them?

The following are the most relevant regulations:

1. DIF's coverage maximum amount: S/ 124,428.
2. Coverage period: September - November 2022

You can access the full text of said regulation in the following link: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizacion-del-monto-maximo-de-cobertura-del-fondo-de-seg-circular-no-b-2261-2022-2101696-1/>

Published in El Peruano Official Journal on September 3, 2022.

If you need more information, please do not hesitate to contact our attorneys, experts in this matter, at the following email address: AreaFinanciera@munizlaw.com »



Las *descentralized autonomous organizations*, sociedades imperfectas en la web 3

Las organizaciones autónomas descentralizadas, o *decentralized autonomous organizations* en inglés (DAO), vienen dando que hablar en las discusiones sobre el futuro del internet y la web 3. Tienen como características, a grandes rasgos: (i) ser consideradas como una “entidad”, (ii) con un objetivo definido, (iii) donde la participación (voz y voto) se decide por la tenencia de un token (criptomoneda emitida en el *blockchain*), y (iv) donde la coordinación sobre la entidad y el proyecto se ejecuta a través de una serie de reglas (*smart contracts*) ejecutables en el *blockchain*. A las DAO se les atribuye, entre otras virtudes, ser descentralizadas, transparentes (en tanto todos los registros de sus operaciones están el *blockchain*), de un gobierno corporativo eficiente, y ser “organizaciones de base” (*grassroots*).

Cuando veo las características de las DAO, sin embargo, no puedo evitar pensar que estamos ante una sociedad imperfecta, con el funcionamiento de una persona jurídica, pero ninguna de sus virtudes, ni las del sistema legal asociado a ellas. Por un lado, si bien una DAO puede ser considerada una “entidad” en el sentido lato del término, no tiene personería jurídica independiente de sus miembros. Aunque es cierto que, hasta el momento, pocos estados en Estados Unidos (entre ellos, Wyoming) permiten que las DAO se puedan incorporar en dicha jurisdicción como *limited liability companies* (LLC), el solo lanzamiento de una DAO como un proyecto no implica el otorgamiento de personería jurídica (ni el beneficio de la responsabilidad limitada).

[illegible]

Otra similitud entre las DAO y las sociedades se da entre el objetivo de una DAO y el objeto social de una sociedad (la descripción detallada de los negocios y actividades lícitas a las que se va a dedicar). Una DAO se organiza con un objetivo en mente (por ejemplo, la resolución de un problema, o brindar un servicio) y recopila fondos con este propósito. ¿Qué diferencia esto del objeto social que deben declarar las sociedades (de manera más específica en los sistemas de derecho civil que los de *common law*) y que también fomenta la participación de accionistas e inversionistas? Ninguna.

Un concepto diferenciador entre una DAO y una sociedad es que la primera funciona bajo una estructura coordinada a través de una serie de *smart contracts* establecidos bajo el criterio de ciertos acuerdos de “gobernabilidad” (*governance frameworks*) que, en teoría, les brinda un gobierno corporativo automatizado, eficiente y menos propenso a errores y manipulación humana. Sin embargo, ¿acaso el uso de plataformas tecnológicas cuestionaría su semejanza básica con una sociedad? Creemos que no. Que se incorpore o no elementos tecnológicos para la consecución del fin social es irrelevante para eso, así como el uso de herramientas tecnológicas por una sociedad frente a otra que no. Esto no evita que ambas sigan manteniendo su condición de personas jurídicas.

Si bien el concepto de web 3 busca una experiencia de usuarios más directa y colaborativa, ¿las DAO no son un intento de reinventar la rueda?, ¿qué impide que una persona jurídica opere con una base informática de *smart contracts* y los beneficios que ya le otorga el derecho societario (responsabilidad limitada de los accionistas, protecciones contra el abuso de mayorías, acciones de responsabilidad contra funcionarios, entre otros)? Creemos que las DAO son sociedades imperfectas que, creadas por el afán de “descentralización” tan en boga en la actualidad, generan más riesgos que beneficios a potenciales inversionistas.)))



EL EXPERTO

Decentralized autonomous organizations, imperfect partnerships in the web 3

Decentralized autonomous organizations (DAOs) have been making people talk in discussions about the future of the Internet and Web 3. Their core characteristics, in a nutshell, are: (i) they are considered an “entity”, (ii) they have a defined objective, (iii) participation (voting and speaking privileges) is decided based on possession of a token (cryptocurrency issued in the blockchain), and (iv) coordination regarding the entity and the project is executed through a series of rules (smart contracts) executable in the blockchain. Among other virtues, DAOs are credited with being decentralized, transparent (since all records of their operations are in the blockchain), part of an efficient corporate governance, and being “grassroots organizations”.

However, when considering DAO's characteristics, I cannot refrain from thinking that we are dealing with an imperfect partnership operating like a legal entity, but having none of its virtues nor those of the legal system associated to it. On one hand, although a DAO may be considered an “entity” in the broad sense of the term, it does not have legal personality separate of its members. Though it is true that, so far, a few states in the United States (including Wyoming) allow DAOs to be incorporated in that jurisdiction as limited liability companies (LLCs), the mere launch of a DAO as a project does not imply obtaining legal personality (nor the benefit of limited liability).

On the other hand, holding a token does not represent rights other than those granted by stocks or stake (the use of technology blockchain to issue it does not change this). While the use of a token may make stake anonymous, to a certain degree - unlike the full identification of the shareholder in a share register - its practical use is the same: having the right to participate and decide in the management of an entity. In addition, take into account that the internal organization of DAOs, unlike the specialized rules of corporate law, does not protect minority's rights. Whoever has the largest number of tokens will have more power of decision in the management of the DAO's purpose without any right to question whatsoever regardless of how said tokens have been granted or created.

Another similarity between DAOs and partnerships is in the purpose of a DAO and the corporate purpose of a partnership (the detailed description of the lawful business and activities in which it will engage). A DAO is organized with a purpose (e.g., solving a problem or providing a service) and it raises funds for said purpose. How is this different from the corporate purpose partnerships must declare (more specifically in civil law systems than in common law systems) which also encourages shareholders and investors participation? None.

A differentiating concept between a DAO and a partnership is that the first one operates under a coordinated structure through a series of smart contracts set out under certain governance frameworks criterion which, ideally, provides automated, efficient corporate governance less prone to errors and human participation. Nevertheless, would the use of technological platforms question its basic resemblance to a partnership? We do not think so. Whether or not technological elements and incorporated for the achievement of the social purpose is irrelevant to that, as is the use of technological tools by a corporation versus another one that does not. This does not prevent both from maintaining their status as legal entities.

While the web 3 concept seeks a more direct and collaborative user experience, aren't DAOs an attempt to reinvent the wheel? What prevents a legal entity from operating with a smart contract computer base and the benefits already granted by corporate law (limited liability of shareholders, protection against majority abuse, liability lawsuits against officers, among others)? We think DAOs are imperfect partnerships that, despite having been created in an effort to “decentralize” - a very popular concept nowadays - create more risks than benefits to potential investors. »



En el tercer trimestre del 2022 destacaron dos proyectos de ley presentados por miembros de la bancada de Perú Libre. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Facilidades tributarias para plantas petroquímicas de urea y fertilizantes¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 3044/2022-CR², denominado “Ley de promoción de las plantas petroquímicas de fertilizantes”, el congresista Jorge Pariona, de la agrupación política Perú Libre, busca impulsar la generación de estas infraestructuras para contribuir con el desarrollo agrario y la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa implica la modificación de la “Ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica” (Ley n.º 29163), incorporando un nuevo artículo en el que se detalla la exoneración del IGV e impuesto a la renta para las nuevas plantas petroquímicas de urea y fertilizantes.

Esta exoneración tendrá un plazo de cinco años, contados desde el inicio de las operaciones. De esta manera, según la propuesta legislativa, se promoverá la producción de fertilizantes a nivel nacional con el objetivo de paliar el déficit de 180 000 toneladas anuales de urea existente en el país.

Impuesto a la fortuna³

La congresista de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino, presentó el Proyecto de Ley n.º 3060/2022-CR⁴, denominado “Ley que crea el impuesto a la fortuna con justicia social”, el cual pretende gravar a los ciudadanos que tengan un patrimonio mayor a 3 500 UIT (más de S/16 millones).

La iniciativa tiene como fin cobrar un impuesto adicional a las personas naturales con grandes fortunas que residan en nuestro país de manera continua por seis meses o de manera discontinua por más de un año. Para esto, se considerará a peruanos y extranjeros, incluso a aquellos no domiciliados en territorio nacional, pero que tengan sus riquezas en el país.

Finalmente, para estimar este impuesto se tomará en cuenta los bienes muebles e inmuebles, los activos financieros, dinero, derechos y todo bien material o inmaterial con valor económico. En ese sentido, a las fortunas que superen las 3 500 UIT se le establecerá un impuesto de 1%; mientras que las que cuenten con más de 4 500 UIT (más de S/ 20 millones 700 000), de 2%; y para los que ostentan un patrimonio superior a las 5 500 UIT (más de S/ 25 millones 300 000) será de 2,8%. »

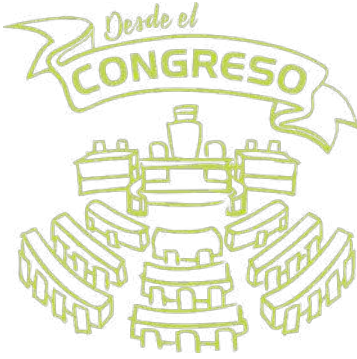
* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (13 de setiembre de 2022). Proponen facilidades tributarias para creación de plantas petroquímicas de urea y fertilizantes. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2022/09/13/proponen-facilidades-tributarias-para-creacion-de-plantas-petroquimicas-de-urea-y-fertilizantes-proyecto-ley-peru-libre/>

² Proyecto de ley 3044/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDQ2OTc=/pdf/PL0304420220912>

³ (14 de setiembre de 2022). Perú Libre busca cobrarle un impuesto adicional a los ciudadanos más ricos. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2022/09/14/peru-libre-busca-cobrarle-un-impuesto-adicional-a-los-ciudadanos-mas-ricos/>

⁴ Proyecto de ley 3060/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUwNjI=/pdf/PL0306020220914>



On the third quarter of 2022, two bills submitted by members of Peru Libre caucus drew the attention. Below is a summary of both legislative initiatives.

Tax Facilities for Urea and Fertilizer Petrochemical Plants¹

Through Bill No. 3044/2022-CR², titled “Promotion of Petrochemical Fertilizer Plants Act”, Congressman Jorge Pariona, from Peru Libre party, aims at promoting these facilities so as to contribute to agricultural development and food safety.

This initiative involves the amendment of the “Promotion of the Petrochemical Industry Development Act” (Act No. 29163), adding a new article explaining the IGV (acronym in Spanish for General Sales Tax) and income tax exemption for new urea and fertilizer petrochemical plants.

This exemption will have a five years term, counted from the beginning of the operations. Thus, according to the legislative proposal, fertilizer production will be promoted nationwide with the purpose of mitigating the country's deficit of 180,000 tons of urea per year.

Wealth Tax³

Kelly Portalatino, congresswoman from Peru Libre caucus, submitted Bill No. 3060 /2022-CR⁴, titled “Wealth Tax with Social Justice Act”; it intends to tax citizens who have a net worth of more than 3,500 UIT (Peruvian taxation units) (over PEN 16 million).

The purpose of the initiative is to charge an additional tax to individuals with large fortunes residing in our country for a continuous period of six months or intermittently for more than one year. This will include Peruvians and foreigners, even those non-domiciled but having their wealth in the country.

Finally, to calculate this tax, personal property and real property, financial assets, money, rights and any tangible or intangible asset with an economic value will be taken into account. In this regard, any wealth exceeding 3,500 UIT will be taxed 1%, while those over 4,500 UIT (over PEN 20 million 700,000) will be taxed 2%, and those exceeding 5,500 UIT (over PEN 25 million 300,000) will be taxed 2.8%. »

* Estudio Muñiz bimonthly presents their clients the legal product “From the Congress”. It is a publication containing a selection of the bills being discussed in the Congress of the Republic and which can affect the business environment. In Columns, we will publish two of the various published projects, which are still under commissions.

¹ (September 13, 2022). Proposal for tax facilities to create urea and fertilizer petrochemical plants. La República, Peru. <https://larepublica.pe/economia/2022/09/13/proponen-facilidades-tributarias-para-creacion-de-plantas-petroquimicas-de-urea-y-fertilizantes-proyecto-ley-peru-libre/>

² Bill 3044/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDQ2OTc=/pdf/PL0304420220912>

³ (September 14, 2022). Peru Libre intends to charge an additional tax to the wealthiest citizens. La República, Peru. <https://larepublica.pe/economia/2022/09/14/peru-libre-busca-cobrarle-un-impuesto-adicional-a-los-ciudadanos-mas-ricos/>

⁴ Bill 3060/2022-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUwNjI=/pdf/PL0306020220914>

Puntos pendientes de regulación: La prevención del cáncer en el ambiente de trabajo

Los empleadores desempeñan un rol fundamental en apoyar al Estado en la implementación de acciones preventivas y reactivas a eventuales problemas en la salud de la población. Por ello, por ejemplo, el 25 de mayo de 2022 se publicó la Ley n.º 31479, otorgando una licencia con goce de haber para que los trabajadores pasen un chequeo oncológico preventivo hasta por 2 días al año y luego, el 16 de agosto de 2022, se publicó la Ley n.º 31561, ampliando en un día adicional dicha licencia para que las trabajadoras se hagan su chequeo oncológico preventivo anual de cáncer de mama o cuello uterino.

Sin embargo, el rol que tienen los empleadores en este ámbito debe ser desempeñado con claros lineamientos de cómo proceder ante determinadas situaciones o supuestos. En tal sentido, esta nota expone los puntos que consideramos pendientes de regulación para el debido ejercicio del mencionado derecho:

- a. Solo la Ley n.º 31479 hace referencia a que las licencias tienen carácter compensable, mientras que la Ley n.º 31561 no hace referencia alguna a la eventual compensación de dicho día extra de licencia para la realización de exámenes oncológicos de prevención de cáncer de mama o cuello uterino. Corresponderá a la futura normativa precisar si, efectivamente, ese día adicional de licencia debe ser asumido por el empleador como un día de remuneración sin recibir contraprestación alguna por dicho pago.
- b. Respecto de la compensación de la licencia de 2 días de chequeo oncológico preventivo general, la normativa señala que serán "posteriormente" compensables. Ello nos hace cuestionarnos si realmente es inviable que se acuerde una compensación previa con horas extras, días de descanso semanal o feriados trabajados, con miras a que serán compensados con el ejercicio del derecho a la licencia en el mismo ejercicio anual.
- c. La redacción de la normativa actual parece indicar que la compensación solo podrá ejecutarse contra trabajo efectivamente prestado. Nos preguntamos, ¿se anula entonces la posibilidad de compensar tales días con descuentos sobre las remuneraciones o beneficios sociales, así como de días de vacaciones pendientes de goce, previo acuerdo?, ¿qué pasaría ante el eventual cese de un trabajador que no haya compensado la licencia otorgada con horas de trabajo?
- d. Al disponer el fraccionamiento de la licencia, se señala que los 2 días podrán ser consecutivos o no. Sin embargo, no se contempla que sería ineficiente, tanto para trabajador como para empleador, disponer de todo un día laboral si los exámenes preventivos solo demorarán unas pocas horas en varios días consecutivos o alternados.
- e. Al determinar el ámbito de aplicación, solo se hace mención a los trabajadores, lo cual omite a los beneficiarios de modalidades formativas laborales.
- f. Al regular los documentos que se deben presentar, se ha incorporado un deber general de confidencialidad de la información, pero, en aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, consideramos importante que se incluyan y especifiquen mayores garantías.

Si bien existe, efectivamente, un avance normativo al contemplar situaciones vinculadas a la enfermedad del cáncer, se requiere una regulación clara y precisa que permita salvaguardar la salud del trabajador, pero también los intereses del empleador. »



ROCIO SAUX VALDEZ

Socia, especialista en derecho laboral y seguridad social

Partner, Labor Law and Social Security expert

rsaux@munizlaw.com

Items Pending Regulation: Cancer Prevention in the Workplace

Employers play a major role supporting the Government in the implementation of preventive and reactive actions for eventual health issues among the population. For example, on May 25, 2022, Act No. 31479 was issued; this act grants a paid leave of absence so that workers undergo preventive medical cancer screenings for up to 2 days a year. Afterwards, on August 16, 2022, Act No. 31561 was issued; it extended said leave of absence in one additional day so that female workers undergo their annual preventive medical breast or cervical screening.

However, the role of employers in this domain must be performed with clear guidelines on how to proceed in certain situations or assumptions. In this regard, this note shows the items that are pending regulation, in our opinion, for the proper exercise of said right:

- a. Only Act No. 31479 refers to the compensable nature of leaves of absence, whereas Act No. 31561 does not refer to any eventual compensation whatsoever of said extra day of leave for preventive breast or cervical screenings. Future regulations shall determine if, indeed, that additional day of leave must be paid by the employer as a payment day without any compensation whatsoever for said payment.
- b. Regarding the compensation for the 2-day leave of absence for general preventive cancer screening, the regulations state they will be “further” compensated. This makes us question if it is really impossible to reach an agreement on prior compensation by working overtime, days for weekly rest or holidays, with the purpose of compensating them with the exercise of the right to leave of absence in the same fiscal year.
- c. The current regulations wording seems to indicate compensation may only be executed against actually performed work. We wonder if the possibility is, then, nullified to reach an agreement for compensation of said days with discounts on the salary or social benefits, as well as vacation pending days? What would happen in the event of a worker who has not offset from the leave of absence granted through working hours?
- d. When splitting the leave of absence, it is stated that those 2 days may or may not be consecutive. Nevertheless, the law does not provide it would be a waste of time, both for the worker and the employer, to take a whole working day if the preventive exams will take only a few hours in several consecutive or alternate days.
- e. The scope of this application refers only to workers, leaving out the beneficiaries of employment training modalities.
- f. For the regulation of the documents to be submitted, a general duty of confidentiality for information has been added, but, under the Personal Data Protection Act, we believe their inclusion and provision of more guarantees is important.

Although there is, indeed, progress in regulations that include cancer-related situations, clear and accurate regulations are needed to protect both workers' health and the employer's interests. »



Chile: la advertencia sobre los límites al poder

Con el 61,86 % de los votos, los chilenos rechazaron el borrador de nueva Constitución el pasado 4 de septiembre en una larga jornada que convocó a más de 12 millones de electores. En concordancia con las previsiones anticipadas meses atrás, el resultado mantiene en vigencia la carta magna de 1980, aprobada bajo el régimen de Augusto Pinochet. De esta manera, los ansiados aires de revolución, reimpulsados por el incipiente gobierno de Gabriel Boric, quedan mitigados durante un periodo que parece acabar más pronto que tarde.

Y es que la celebración por el triunfo del “No” ha llevado a los entusiastas defensores de la estabilidad jurídica a desechar la idea de un nuevo intento por cambiar las reglas del juego del país vecino. Nada más ingenuo. Ha sido el mismo Gabriel Boric quien, durante su mensaje a la nación, reafirmó su deseo de promover un nuevo proceso constituyente en Chile, reinterpretando de manera antojadiza el mandato

popular, pues las razones del rechazo son variadas e imposibles de condensar. Aun así, el mandatario de 36 años dio el primer paso hacia ese destino presentando un nuevo gabinete ministerial con el propósito de enmendar sus errores y virar probablemente hacia la moderación.

Un escenario similar tuvo lugar en tierra local, cuando en medio de la campaña electoral del 2021, el hoy presidente Pedro Castillo y algunos de sus simpatizantes vitoreaban a viva voz la intención “mayoritaria” de los peruanos por tener una nueva constitución. Con el mismo tenor chileno, los apetitos reformistas tenían como única vía optar por la tabla rasa y reescribir desde cero lo que creían sería la solución definitiva a nuestros enraizados problemas. Aunque las ideas de vacancia y adelanto de elecciones son hoy el centro del debate, las voces susurrantes no han desfallecido y amenazan con acentuar el desequilibrio político y económico que sufrimos.

Con el 61,86 % de los votos, los chilenos rechazaron el borrador de nueva Constitución el pasado 4 de septiembre en una larga jornada que convocó a más de 12 millones de electores. En concordancia con las previsiones anticipadas meses atrás, el resultado mantiene en vigencia la carta magna de 1980, aprobada bajo el régimen de Augusto Pinochet.

cuando esta coincide con la nuestra, con nuestras creencias y objetivos. Cuando son nuestros amigos los que tienen el poder, somos incrédulos frente al peligro. Al ser del mismo bando, creemos que jamás usarán el monopolio de la violencia contra nosotros. Sin embargo, las constituciones no conocen de gobernantes de turno ni de pretensiones momentáneas; llegan para quedarse, gobierne quien gobierne. Es cuando asume el mando aquel que repudiamos y cuyas ideas repelemos cuando el escenario pinta realmente gris.

Una buena constitución no es aquella que, cuando gobiernan los tuyos, te sientes tranquilo y los otros temen; sino aquella que, cuando no gobiernan los tuyos, no hay nada por qué temer. »

Todo esto se consolida bajo la premisa de lo insuficiente y obsoleto de nuestro sistema, el cual continúa privilegiando a un sector minoritario en detrimento de aquella mayoría desfavorecida a través de dinámicas que son precisas de controlar y corregir. La finalidad es, pues, dotar de nuevas y extensas licencias a los gobernantes para desarrollar, con la menor cantidad de obstáculos posible, iniciativas que conlleven a este fin. Asimismo, conceder —de manera todavía imprecisa y ambigua— prerrogativas a grupos sociales que consideran excluidos. Logrado esto, se prevé que seremos una sociedad justa y armoniosa. Otra ingenuidad.

Lo cierto es que hemos de sospechar de todo estatuto que otorgue la potestad deliberada al Estado para actuar sobre las libertades de los ciudadanos, sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades por ello. Vale la pena recordar la naturaleza y origen de los textos normativos de limitar el poder político, en su afán por prevalecer los derechos individuales. Una opción que faculta a las autoridades políticas a pasar por encima de este principio, incluso con las mejores intenciones —cuestionables— de alcanzar la igualdad, debe ser descartada.

Sencillo resulta someternos a la voluntad política



ALEXANDRA OJEDA
Especialista en comunicaciones
Communications expert
aojeda@munizlaw.com

Chile: A Warning on the Limits on the Way to Power

The Chilean people rejected the new Constitution draft last September 4th, with 61,86% of the votes, in a long day that gathered over 12 million voters. According to forecasts from previous months, the result keeps 1980 Constitution - approved under Augusto Pinochet - in force. Thus, the long awaited winds of revolution, re-boosted by Gabriel Boric's early government, are mitigated for a period that seems to end sooner than later.

The celebration for the victory of the "No" option has led the enthusiastic legal stability defenders to dismiss the idea of a new attempt to change the rules of the game in the neighboring country. So naive. It was Gabriel Boric himself who reassured his wish for a new constitutional process in Chile in his address to the Nation, whimsically reinterpreting the people's mandate, since the reasons for the rejection of the proposal are diverse and impossible to summarize. Nevertheless, the 36-year-old President took the first step towards that destination by introducing a new Cabinet with the purpose of correcting his mistakes and, probably, turn to a moderate position.

Here, in Peru, a similar scenario took place when, in the middle of the 2021 presidential campaign, current President Pedro Castillo and some of his supporters loudly cheered the "majority" of Peruvians' desire for a new Constitution. In the same line as Chile, the only path appetites for reform had was a clean slate and rewriting from scratch what they believed to be the final solution to our deeply rooted issues. Although the thoughts of impeachment and calling snap elections are currently the center of debate, those whispering voices have not dismayed and are a threat to increase the political and economic unbalance we suffer.

All of this gathers under the premise of how deficient and obsolete our system is, as it keeps granting privileges to a minority to the detriment of a disfavored majority by means of a dynamic that should be controlled and rectified. Thus, the purpose is to provide new and extensive permits to presidents so as to develop initiatives leading to that end with the fewest obstacles possible. Also, grant privileges—still unclear and ambiguously defined—to social groups they deem excluded. Once this is achieved, the forecast is that we will become a fairer and more harmonious society. Naiveté once again.

The truth is that we should be suspicious of any statute granting the State deliberate powers to act upon the

citizens' freedom with no accountability or responsibility for this. It is worth to remember the nature and origin of regulatory texts in the sense of limiting political power, in an effort to make individual rights prevail. An option that allows political authorities to bypass this principle, even if they have the best of intentions to reach equality—which is arguable—should be dismissed.

It is easy to submit to the political will when it is the same as ours, and shares our beliefs and objectives. When our friends are in power we do not see the danger. Since we are on the same side, we believe they would never use the violence monopoly against us. However, constitutions do not know about sitting presidents or fleeting ambitions; they come to stay, no matter who is in office. That is the time when the one we despise, and whose ideas we find repellent when things go really bad, assumes office.

A good constitution is not the one with which you feel calm while your friends are in power, but the one that gives you nothing to fear when your friends are not there.)))

Webinars

Llevamos a cabo distintos *webinars* con nuestros clientes. Nos hemos ocupado de la decisión del Indecopi de declarar barrera burocrática ilegal la tercerización laboral; del marco normativo del proceso de formalización minera; y de la importancia que tienen casillas electrónicas del OEFA para evitar el embargo de nuestras cuentas bancarias; entre otros.]]

We carried out various webinars with our clients. We have addressed Indecopi's decision to declare outsourcing as an illegal bureaucratic barrier; the legal framework of the mining formalization process; and the importance of OEFA's (Environmental Oversight and Assessment Agency, acronym in Spanish) electronic mailboxes to prevent the attachment of our bank accounts; among others.]]

ESTUDIO

MUNIZ

BURO
CRÁTICA
FISCAL
Y
COMERCIAL
Y
INVERSIÓN

Propuesta para mejorar el marco normativo del proceso de formalización minera

Mineros / Proveedores /
Financistas / Inversionistas /
Compradores / Transportistas

DANIEL PALOMINO
Socio senior

LUCILA BARJA
Asociada

MARCO PEREDA
Abogado

REGÍSTRASE AQUÍ:
<https://cutt.ly/w33rKWI>

**Jueves
1 de septiembre
10 a.m.**

ESTUDIO

MUNIZ

BURO
CRÁTICA
FISCAL
Y
COMERCIAL
Y
INVERSIÓN

Efectos de la reciente decisión del Indecopi sobre la tercerización

**VIERNES
26 de agosto
9:00 a.m.**

Pierino Stucchi
Socio principal

José Antonio Bezada
Socio

José Quintana
Asociado

REGÍSTRASE AQUÍ: <https://cutt.ly/w33rKWI>

ESTUDIO

MUNIZ

BURO
CRÁTICA
FISCAL
Y
COMERCIAL
Y
INVERSIÓN

CASILLAS ELECTRÓNICAS DEL OEFA

EVITE EL EMBARGO DE SUS CUENTAS BANCARIAS POR NO ESTAR ENTERADO DE UNA MULTA DEL ORGANISMO SUPERVISOR

**Jueves
8 DE SEPTIEMBRE
10:00 a.m.**

RENATO DE VETTORI
Socio senior
Especialista en derecho ambiental

REGÍSTRASE AQUÍ:
<https://cutt.ly/w33rKWI>

TOP RANKED

Chambers

**Latin America
2023**

✓ Bankruptcy /
Restructuring

✓ Capital Markets

✓ Competition / Antitrust

✓ Corporate / M&A

✓ Dispute Resolution:
Litigation

✓ Intellectual Property

✓ International Trade /
WTO

✓ Labour & Employment

✓ Life Sciences

✓ Real Estate

✓ Tax

ESTUDIO

MUNIZ

BURO
CRÁTICA
FISCAL
Y
COMERCIAL
Y
INVERSIÓN

Francisco Díaz
Socio principal

Fernando Meléndez
Socio principal

Pamela Castro
Socio principal

Daniel Oro
Socio principal

Ricardo Herrera
Socio principal

María Perdomo
Socio principal

Eduardo González
Socio principal

Yari Vega
Socio principal

César Perdomo
Socio principal

Pamela Mendieta
Socio principal

César Alvar
Socio senior

Bruno Morales
Socio senior

Juan Carlos Vilca
Socio principal

Flavia Calderón
Socio principal

Ricardo de la Haza
Socio principal

José Antonio Brizuela
Socio principal

Raiza Sosa
Socio principal

Anthony Lidarino
Socio principal

Johana Corderón
Socio principal

Lila Lobo
Socio principal

Diego Muñoz
Socio principal

Diana Pomarubio
Socio principal

Ricardo Wilson
Socio principal

Juliana del Real
Socio principal

Chambers and Partners Latin America 2023

Fuimos considerados por Chambers and Partners Latin America, uno de los directorios legales más importantes dedicado a monitorear la actividad de abogados y despachos, como una de las firmas más destacadas en 11 áreas de práctica, siendo 25 de nuestros abogados reconocidos en la edición 2023.]]

We were acknowledged by Chambers and Partners Latin America, one of the most important legal directories engaged in monitoring the activity of lawyers and law firms, as one of the most important law firms in 11 practice areas; 25 of our attorneys were acknowledged in the 2023 edition.]]

COLUMNAS
- REVISTA LEGAL -

| 27 |

GC Powerlist Peru

El Estudio Muñoz auspició la presentación del GC Powerlist Peru el pasado 18 de agosto en el hotel Hyatt Centric de San Isidro. Este evento estuvo organizado por The Legal 500, una de las compañías de clasificación legal más importantes del mundo, y se destacó el trabajo de los gerentes legales de las principales compañías del país. 》》》

Estudio Muñoz hosted the presentation of GC Powerlist Peru last August 18 at Hyatt Centric Hotel in San Isidro. This event was organized by The Legal 500, one of the most important legal ranking companies worldwide. Emphasis was on the work of legal managers of the leading companies in the country. 》》》



GC Summit Peru

Nuestro socio principal del área de Derecho Corporativo y M&A, Mauricio Olaya, y nuestro socio senior de la misma área, Juan Carlos Vélez, participaron en el primer panel del GC Summit Peru, en donde abordaron la continua evolución de las tareas que desarrollan los *general counsel* en las empresas. Junto a ellos, estuvieron Juan Antonio Castro, vicepresidente legal corporativo de Intercorp Group, y Gianmarco Tagliarino, general counsel & corporate affairs VP del Grupo Breca. El evento fue organizado por The Legal 500. 》》》

Our main partner in the Corporate Law and M&A areas, Mauricio Olaya, and our senior member of the same area, Juan Carlos Vélez, participated in the GC Summit Peru first panel, which addressed the ongoing evolution of the tasks developed by the general counsels in companies. They were alongside Juan Antonio Castro, corporate legal vice-president of Intercorp Group, and Gianmarco Tagliarino, general counsel & corporate affairs VP of Breca Group. The event was organized by The Legal 500. 》》》

Campeonato de vóley

Como parte de nuestras actividades de integración, celebramos el primer campeonato de vóley del año en el colegio Nuestra Señora del Pilar, donde compartimos gratos momentos junto a nuestro *staff* de las áreas legales y administrativas. Nuestra área legal se coronó como el equipo ganador. 》》》

As part of our integration activities, we celebrated the first volleyball tournament of the year in Nuestra Señora del Pilar School. We shared enjoyable moments with the legal and administrative staff of our firm, who was awarded winner of the tournament. 》》》



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chíncha - Cusco - Piura - Chiclayo - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca